

GOBERNABILIDAD, UNA LUCHA CONTRA EL TIEMPO

Signo de los Tiempos. El 14 de agosto el secretario de Gobernación afirmó que el recién surgido ejército Popular Revolucionario (EPR) era una simple pantomima. Sin embargo, es un hecho que para entonces el ejército federal ya no estaba en sus cuarteles, al menos no en Chiapas, Tabasco, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo o Querétaro. Tan copiscua presencia militar en parte del país, se debe, desde luego, al cerco militar sobre el Ejército Zapatista de Liberación Militar (EZLN) primero y ahora también al EPR, pues si este último fuera pantomima, tal despliegue militar sería absurdo. En otras zonas del país también se puede ver al ejército en sitios y operaciones que en tiempos normales solían ser responsabilidad de la policía -supuesto instrumento de control del gobierno sobre la sociedad-, se perdió hace mucho; de ahí la creciente presencia militar como sustituto. Miguel de la Madrid debió de destruir la Dirección Federal de Seguridad para salvarla del narcotráfico, y ahora el Procurador General de la República, por la misma razón, debió concentrar, con ayuda del ejército, a sus 4,200 policías para poder desarmar y cesar a 737 de ellos - ¡17 por ciento del total!-, sospechosos de estar bajo el control de narcotráfico, aunque en realidad la duda abarca al doble: a 1500 elementos (*Reforma*, 20 de agosto).

A dos años del asesinato del candidato presidencial del PRI, el misterio inicial no sólo se ha disipado sino que ha aumentado, pues con el asesinato reciente de Jesús Romero -el primero en interrogar al asesino de Colosio en ese tan lejano 23 de marzo de 1994- ya suman diez personas asociadas al hecho que han sido eliminados en forma violenta (*Reforma*, 19 de agosto).

Para seguir, los indicadores muestran que una de las características del actual tiempo mexicano es justamente la pérdida de la gobernabilidad del que por cuatro decenios fuera el sistema político más gobernable de América Latina y uno de los más gobernables del mundo.

Lo que ya no es. Tras destruir a sus enemigos en el campo de batalla, la élite revolucionaria mexicana dio forma a un sistema político no competitivo, centrado en una presidencia sin límites, electoralmente controlado por un partido de Estado y socialmente sustentado por un amplia red corporativa. se trató de un arreglo tan antidemocrático como gobernable por ser mutuamente aceptable para todos los actores políticos estratégica -sindicatos, organizaciones campesinas, empresarios, burócratas, fuerzas armadas, medios de comunicación, universidades, colegios de profesionistas, etcétera-, que tenían incentivos para no comportarse disfuncionalmente frente al orden establecido. La descripción anterior del arreglo político del México postrevolucionario corresponde como anillo al dedo, a una definición de

governabilidad (Michel Coppedge "Prospects for Democratic Governability in Venezuela", *Journal of Interamerican and World Affaires*, vol. 36, verano de 1994, p. 40).

En su etapa "clasica", el actual sistema político mexicano contó con un entramado institucional que le permitió canalizar con gran efectividad las demandas de sus actores estratégicos por contradictorias que éstas fueran. Sin embargo, la inesperada exigencia de democratización que presentó en 1968 un sector de clase media urbana -los estudiantes- ya no pudo ser procesada de la manera tradicional y fue violentamente reprimida, como también lo fue su secuela en 1971. A partir de entonces las disfuncionalidades del arreglo político imperante empezaron a aflorar, lentamente al principio y muy rápidamente después.

Primero fueron las fallas estrictamente políticas pero luego se sumaron las económicas y para 1988 se conjuntaron ambas para dar nacimiento a una insurgencia electoral que sólo pudo ser contenida mediante un fraude monumental. A partir de entonces y a contrapelo del sistema, se dio el afianzamiento de dos partidos de oposición -uno antiguo de derecha (PAN) que buscó negociar con el viejo orden y otro nuevo, de izquierda (PRD). que decidió chocar de frente con él- y un buen número de elecciones locales y todas las nacionales se convirtieron en eventos reales, competidos. Sin embargo, la falta de credibilidad de muchos de esos procesos electorales los

transformaron en energía negativa, en nuevas fuentes de ilegitimidad.

Hoy, la reforma electoral en proceso de aprobación -la cuarta en los últimos siete años- se presenta como el marco institucional que por fin dará credibilidad y funcionalidad al proceso político formal en México. Desafortunadamente, y dada la experiencia histórica, es necesario esperar a ver si la reforma cumple en la práctica con su objetivo de instrumento para recuperar la gobernabilidad perdida.

Los Indicadores de la Ingovernabilidad. Atul Kohli, un politólogo hindú, señala que tarde o temprano todos los países subdesarrollados se convierten en entidades difíciles de gobernar. Y para detectar las causas y sugerir posibles soluciones a ese problema, propone concentrar la atención en tres grandes áreas del proceso político: a) la naturaleza de la coalición gobernante, b) la efectividad gubernamental y c) la capacidad del sistema para enfrentar el conflicto político sin recurrir a la violencia (*Democracy an Discontent. Indians Groeing of Gobernability*, Cambridge University Press, 1990) En las tres áreas mencionadas, México presenta hoy problemas serios y crecientes.

Originalmente, la coalición que socialmente sostiene al régimen y a su gobierno, fue la compleja red corporativa formada por el partido de Estado -obreros, campesinos y sector popular- y por organizaciones empresariales. Sin embargo, en 1987-1988 esta coalición histórica se resquebrajó tras la

salida del PRI de la Corriente Democrática (CD) encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. La CD representó el mayor desafío que el partido de Estado hubiera enfrentado desde 1952, y para reparar el daño, el presidente Carlos Salinas construyó sin pérdida de tiempo una alianza inédita con el PAN -le reconoció parcelas de poder- y con la Iglesia Católica, en favor de la cual dio marcha atrás en una política jacobina de casi siglo y medio. Este nuevo arreglo fue completada con una relación especial entre la presidencia y el gran capital nacional y extranjero por la vía del neoliberalismo: disminución del gasto público, Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, privatización de parte del sector estatal, fin de la reforma agraria y abandono de la protección al movimiento obrero. En la práctica, la coalición salinista que se mantiene con Ernesto Zedillo, resultó menos amplia y firme que la anterior.

Por lo que hace al segundo elemento -la efectividad de la acción gubernamental-, Kholi señala que se le debe de juzgar según las prioridades del propio régimen y gobierno. Dos son las prioridades que destacan en el discurso oficial mexicano desde 1940: desarrollo económico y justicia social. En relación al primero, es suficiente señalar que entre 1940 y 1976, el crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 6 por ciento. Sin embargo, en 1976 esa tendencia positiva se detuvo, y aunque volvió a resurgir con el efímero **boom** petrolero, a partir de 1982 desapareció definitivamente. Entre

1982 y 1995 el promedio de crecimiento del PIB fue de 2.9 por ciento, apenas suficiente para mantenerse a la par del crecimiento demográfico. En términos *per capita*, México no ha crecido en los últimos catorce años. Y el estado que guarda la promesa del PRI de construir un México más justo se desprende de las propias cifras oficiales sobre la distribución del ingreso, que muestran una concentración sistemática desde los años ochenta hasta llegar a 1994, cuando el 50 por ciento de los hogares que estaban en el fondo de la pirámide social debieron sobrevivir con el 16.2 por ciento del ingreso disponible, mientras que el 10 por ciento superior lo hizo con el 41.2 por ciento.

Indicadores más tradicionales de eficiencia gubernamental, como por ejemplo, la capacidad de la autoridad para mantener la ley y el orden, muestran también una tendencia negativa. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Gobernación, siete de cada diez ciudadanos consideran hoy que la inseguridad es su motivo principal de angustia, y los hechos lo avalan: de 1980 a 1994 el índice de delitos del fuero común se duplicó y los del fuero federal se cuadruplicó (*La Jornada*, 8 de marzo).

El tercer y último indicador que da contenido al concepto de gobernabilidad es la capacidad del sistema para enfrentar el conflicto político sin violencia. La vocación del actual sistema de poder era la de negociar y cooptar en vez de reprimir. Y aunque nunca desapareció el lado violento de la política mexicana, últimamente éste parece estar ganando

terreno. En efecto, los asesinatos de 1994 de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, y de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general de ese partido, retrotrajeron a México a 1928, última vez que las pugnas internas de la élite política se habían resuelto por la vía del asesinato. En el otro extremo, está el resurgimiento de la violencia del régimen contra la oposición; la cuota de sangre del Frente Democrático Nacional primero y del PRD después es ya de alrededor de cuatrocientos muertos a partir de 1988, siendo el episodio más dramático uno de los más recientes: la emboscada preparada el 28 de junio de 1995 por 200 policías de Guerrero en Agua Blancas y que dejó un saldo de 17 campesinos muertos. Finalmente, está la violencia de una oposición -la del EZLN en Chiapas primero y el EPR en Guerrero después- que justifica su recurso a las armas como último pero legítimo recurso ante la represión y el autoritarismo institucionalizados contra grupos particularmente explotados y humillados: campesinos e indígenas.

La Solución. Ya no se puede recuperar la gobernabilidad autoritaria del pasado, aunque existe la posibilidad de que alguien lo intente. El único camino viable es construir un nuevo régimen con una coalición diferente que permita el procesamiento efectivo y pacífico de las demandas sociales. Dada la heterogeneidad de la sociedad mexicana y el espíritu de los tiempos, ese nuevo régimen tiene que ser democrático; desafortunadamente hay una notoria falta de liderazgo en el

gobierno para llevar adelante esta empresa con la energía, claridad y velocidad que la situación reclama. Por otra parte, los intereses creados por el autoritarismo aún vigente más viejo del mundo -el nuestro-, temen por la seguridad de sus privilegios y de lo hasta ahora acumulado, y están librando una batalla de retaguardia para retrasar al máximo el momento del cambio.

En suma, por haber perdido las oportunidades de modernización política que se presentaron en el último cuarto de siglo, México está hoy en una carrera contra el tiempo: entre más se posponga la transformación política real, más incierto y peligroso se vuelve el futuro colectivo. La tarea es, por tanto, despertar el sentido de conservación en la sociedad para generar la energía necesaria para acabar con los obstáculos aún existentes a la transformación democrática de México.